

Los cuidados como factor de arraigo: inmovilidad, dignidad y agencia en contextos de alta vulnerabilidad en América Latina y África.

Marta Carretero Navarro

Responsable del Área de Estudios de Ayuda en Acción

Resumen

Durante el último año, Ayuda en Acción, junto con la Universidad del Pacífico (Perú) y el IDRC de Canadá, desarrolló un estudio en cinco países — Etiopía, Mali, Colombia, Ecuador y México — para comprender por qué las personas se quedan en contextos frágiles. Uno de los hallazgos centrales fue el papel decisivo de los cuidados en las decisiones de arraigo, especialmente entre las mujeres, para quienes las responsabilidades domésticas y afectivas condicionan tanto sus posibilidades de movilidad como su permanencia. La investigación muestra que la feminización del quedarse es el reverso de la feminización de la migración, revelando cómo las cadenas globales de cuidados moldean aspiraciones y limitaciones. Mediante métodos mixtos, el estudio identificó perfiles de inmovilidad ligados al género, las relaciones familiares y las cargas de cuidado. Con base en estos resultados, el informe propone políticas públicas que reconozcan y redistribuyan el cuidado. En estos escenarios, permanecer se configura como una forma de agencia y dignidad.

Palabras clave
inmovilidad, arraigo, cuidados, migración, género, dignidad.

Abstract

During the past year, Ayuda en Acción, together with the Universidad del Pacífico in Peru and Canada's IDRC, carried out a study in five countries, Ethiopia, Mali, Colombia, Ecuador, and Mexico, to understand why people remain in fragile contexts. One of the main findings highlighted the decisive role of care

responsibilities in decisions to stay, especially among women, whose domestic and emotional duties shape both their mobility options and their permanence. The research shows that the feminization of staying mirrors the feminization of migration, revealing how global care chains shape aspirations and constraints. Using mixed methods, the study identified patterns of immobility linked to gender, family relations, and care burdens. Based on these findings, the report proposes public policies that recognize and redistribute care. In these contexts, staying emerges as a form of agency and dignity.

Keywords:

Immobility, rootedness, care, migration, gender, dignity.

Los cuidados como factor de arraigo: inmovilidad, dignidad y agencia en contextos de alta vulnerabilidad en América Latina y África.

Marta Carretero Navarro

Responsable del Área de Estudios de Ayuda en Acción

Introducción

Desde los años 80, la movilidad transnacional ha ocupado un lugar destacado en la discusión pública, en la investigación académica y en las agendas de cooperación (Arango, 2007). Aun así, este énfasis contrasta con un hecho constante: la mayoría de las personas no se desplaza, incluso cuando viven en condiciones de violencia, crisis climática, pobreza o inestabilidad (Carling, 2002). La permanencia —motivada por obligaciones familiares, vínculos afectivos, temor, arraigo o por limitaciones estructurales que imposibilitan migrar (De Haas, 2010)— sigue siendo una dimensión poco explorada y frecuentemente desatendida por las políticas de desarrollo y la acción humanitaria. A esta realidad la denominamos “inmovilidad”, entendida como un fenómeno que va más allá de la simple ausencia de movimiento.

Con el propósito de profundizar en esta cuestión, y en línea con el mandato de Ayuda en Acción en inclusión socioeconómica, realizamos un estudio comparativo en cinco países donde la organización trabaja de manera continuada —Mali, Etiopía, Colombia, Ecuador y México— en colaboración con la Universidad del Pacífico (Perú) y el IDRC de Canadá. Los hallazgos evidencian que quedarse no constituye un estado pasivo, sino una estrategia activa condicionada por estructuras sociales, económicas y afectivas. La decisión de permanecer responde a dinámicas relacionales, responsabilidades de cuidado, desigualdades de género, normas sociales y acceso limitado a recursos materiales, institucionales o simbólicos. En muchas comunidades, la inmovilidad también opera como mecanismo de resistencia, protección o reconstrucción tras experiencias de trauma o debilitamiento del Estado.

Desde la mirada más cooperativa —como señalé en el Congreso—, reconocer el valor de la permanencia requiere ensanchar las intervenciones hegemónicas sobre la migración. No basta con promover vías seguras de movilidad; es igualmente esencial asegurar que quienes optan o se ven obligados a quedarse lo hagan de una manera segura y libre. Cuando la permanencia está sostenida por las dinámicas que emergen desde la intimidad hogares, el arraigo o la responsabilidad colectiva, se convierte en una forma cotidiana de resiliencia.

Por ello proponemos un cambio de enfoque: que la inmovilidad sea parte integral de la movilidad humana. Comprender quiénes permanecen, por qué lo hacen y cuáles son las consecuencias para las políticas de desarrollo, adaptación climática, protección social y cohesión comunitaria es indispensable para construir respuestas más equitativas y transformadoras.

Marco Teórico: Repensar la inmovilidad con la movilidad.

Entender la inmovilidad requiere desplazar el foco habitual centrado únicamente en los movimientos migratorios y reconocer que la decisión —o la imposibilidad— de permanecer está profundamente anclada en dimensiones sociales, emocionales y económicas (De Haas, 2021). Este estudio se apoya en un marco teórico que integra tres pilares analíticos: las aspiraciones, las capacidades y las economías del cuidado, entendidas dentro de un enfoque de movilidad humana concebido como un continuo.

La premisa de partida es que la inmovilidad no constituye el reverso de la movilidad, sino una manifestación más dentro de un espectro de experiencias. A lo largo de la vida, las personas transitan entre momentos de desplazamiento, deseo de moverse, imposibilidad de hacerlo o decisiones conscientes de permanecer. Por ello, quedarse no debe interpretarse como una señal de inacción, sino como el resultado de negociaciones personales, familiares y estructurales. Este enfoque permite analizar la permanencia como un fenómeno socialmente producido, emocionalmente situado y condicionado por estructuras, con la misma relevancia analítica que los movimientos visibles.

El primer eje de este marco conceptual es el de las aspiraciones, entendidas no sólo como el deseo explícito de migrar, sino como el conjunto de expectativas vitales que las personas

consideran posibles, legítimas o deseables (De Haas, 2021). Estas aspiraciones suelen formarse en relación con momentos del ciclo vital, la estabilidad del hogar, las necesidades de cuidado de hijos e hijas o la disponibilidad de alguien que pueda asumir responsabilidades domésticas en caso de ausencia. Son, por tanto, aspiraciones relacionales, configuradas por la historia familiar, las experiencias migratorias de la comunidad, las redes sociales y los niveles percibidos de riesgo.

El segundo se refiere a la capacidad propia de migrar, es decir, los recursos que permiten traducir las aspiraciones en acción. Incluyen factores económicos, acceso a documentación, disponibilidad de servicios básicos, condiciones de seguridad, salud mental, redes de apoyo y confianza en las instituciones. Una persona puede querer migrar, pero no disponer de las capacidades para hacerlo debido a los costos asociados, los peligros de las rutas, la falta de documentos o los temores originados por experiencias traumáticas previas. De manera inversa, alguien puede contar con los medios materiales para desplazarse, pero carecer del respaldo familiar o comunitario necesario para ausentarse del hogar.

Las capacidades representan el punto de encuentro entre las condiciones estructurales y las circunstancias individuales; es en ese cruce donde la movilidad o la permanencia se vuelven viables o se ven restringidas. Desde esta perspectiva, uno de los aportes clave del marco conceptual es entender que ni las aspiraciones ni las capacidades funcionan como categorías dicotómicas: ambas son flexibles, cambiantes y se ajustan de manera continua según las dinámicas familiares, económicas y sociales.

Si bien el marco inicial se centraba en estos dos ejes, los resultados del estudio evidenciaron la necesidad de incorporar un tercer componente fundamental: el papel del cuidado como determinante central de la inmovilidad. Las tareas de cuidado, profundamente feminizadas, emergen como una de las fuerzas más influyentes en la decisión —o imposibilidad— de desplazarse. Las mujeres suelen encargarse del cuidado cotidiano de niñas, niños, personas mayores o familiares con enfermedades o dependencia, lo que restringe de forma sustantiva sus oportunidades de movilidad (Mata-Codesal, 2017). A ello se suma el peso del cuidado emocional: acompañar duelos tras deportaciones o desplazamientos, sostener a familiares afectados por el trauma y mantener la continuidad simbólica del hogar en situaciones de crisis. La permanencia

femenina, por tanto, no responde simplemente a preferencias personales, sino a normas sociales, desigualdades institucionales y a la falta de sistemas públicos que redistribuyan estas responsabilidades.

Este marco incorpora también la noción de permanencia significativa. Para muchas personas, quedarse no es una renuncia sino una elección con sentido: implica salvaguardar la tierra, la identidad cultural, la memoria familiar o el hogar; mantener la cohesión del grupo doméstico; o hallar estabilidad emocional después de experiencias de violencia o migración fallida. En otros casos, la permanencia funciona como estrategia ante la incertidumbre, especialmente cuando migrar comporta riesgos mayores que permanecer. Y para un número importante de personas, quedarse es una combinación entre deseo, obligación y limitaciones. Así entendida, la inmovilidad no equivale a ausencia de alternativas, sino que constituye un entramado dinámico de decisiones, resistencias, cuidados y negociaciones.

Sobre la base de esta articulación conceptual —que vincula aspiraciones, capacidades y cuidados— se diseñó la metodología del estudio, con el propósito de captar tanto los patrones estructurales de la inmovilidad como los significados que las personas atribuyen a su permanencia en contextos frágiles.

Diseño del estudio, enfoque metodológico y selección de casos

El estudio se llevó a cabo mediante un enfoque de métodos mixtos secuenciales aplicado en cinco países que, aunque presentan dinámicas migratorias distintas, comparten patrones de exclusión y vulnerabilidad. El propósito era captar la complejidad de la inmovilidad combinando herramientas cuantitativas, aproximaciones cualitativas y observación contextual en terreno.

La primera fase consistió en la realización de grupos focales, que ayudaron a traducir los conceptos clave al lenguaje cotidiano, reconocer percepciones locales sobre la permanencia y ajustar los instrumentos de encuesta. En la etapa siguiente se implementó una encuesta de hogares en cada país, con muestras que oscilaron entre 350 y 420 personas. Este cuestionario abordó aspiraciones migratorias, cargas de cuidado, trayectorias familiares, condiciones materiales, seguridad, estatus legal y experiencias de movilidad interrumpida.

El análisis cuantitativo incluyó un modelo de clases latentes, que permitió identificar perfiles de inmovilidad comparables entre los cinco contextos. Estos resultados se enriquecieron con entrevistas en profundidad (entre 22 y 40 por país), donde se indagó en las dimensiones afectivas, morales y relacionales que moldean la decisión de quedarse.

El diseño incorporó además una perspectiva de género transversal, con preguntas sobre uso del tiempo, responsabilidades de cuidado y dinámicas domésticas. Aunque se enfrentaron restricciones logísticas y de seguridad —particularmente en Mali y Etiopía—, la triangulación de métodos ofrece una visión robusta y matizada del fenómeno.

Principales Resultados

La inmovilidad se manifiesta de manera diferente en cada uno de los cinco países analizados, aunque todos comparten elementos estructurales comunes, como la presencia de conflicto, desigualdad persistente, impactos climáticos, debilidad institucional y, de forma particularmente marcada, una economía de cuidados que condiciona las decisiones. Las variaciones no se explican únicamente por los contextos nacionales: dentro de cada país coexisten diversos perfiles de permanencia, identificados mediante un Análisis de Clases Latentes (ACL) y posteriormente enriquecidos con entrevistas en profundidad. Las encuestas realizadas —373 personas en Mali, 364 en Etiopía, 427 en Colombia, 350 en Ecuador y 350 en México— permiten delinear patrones consistentes a nivel cuantitativo, mientras que las entrevistas —entre 22 y 40 por país— aportan matices emocionales, afectivos y relacionales a la comprensión del fenómeno.

A partir de esta evidencia, se desarrolla a continuación un análisis detallado por país, integrando datos sobre aspiraciones, capacidades, segmentos de inmovilidad y voces recogidas en el trabajo cualitativo.

Mali

En Mali, la combinación de crisis climática severa y violencia institucional configura un escenario en el que permanecer se vuelve casi inevitable. El deterioro ambiental, la inseguridad creciente y la desarticulación de las redes comunitarias que antes sostenían la movilidad estacional han transformado el quedarse en una condición forzada más que elegida. El trabajo realizado en Ségou —con 373 encuestas aplicadas tanto a población local (188) como a personas desplazadas internas (185)— pone de manifiesto esta realidad: la inmovilidad domina el panorama. El análisis de clases latentes muestra que el 73 % de la población no contempla migrar, apenas un 16 % expresa aspiraciones de salida y solo un 11 % se mantiene por arraigo voluntario. Las cifras refuerzan la magnitud del fenómeno: el 95 % del grupo inmóvil prefiere permanecer y el 98 % ni siquiera consideró migrar en el último año; incluso con documentación, el 91 % seguiría eligiendo quedarse.

Detrás de estos números hay experiencias profundamente restrictivas. Las entrevistas revelan a jóvenes que sienten que su futuro está suspendido y a mujeres que cargan con la mayor parte del cuidado en hogares afectados por la pobreza y la fragmentación familiar. La pérdida del ganado, las sequías prolongadas y la inseguridad en las rutas —cada vez más peligrosas— reducen aún más las posibilidades de moverse. En este contexto, la inmovilidad en Mali no responde a un deseo de arraigo, sino a un entorno que limita las alternativas y multiplica los riesgos.

Etiopía

En Afar, al noreste de Etiopía, la decisión —o más bien la imposibilidad— de permanecer está profundamente vinculada al derrumbe del modo de vida pastoral y a la acumulación de desplazamientos y retornos forzados. El trabajo de campo, que incluyó 364 encuestas y 40 entrevistas, recogió testimonios de 154 personas residentes, 171 retornadas de desplazamiento

interno y 39 que regresaron del Golfo tras vivir situaciones de abuso, explotación o violencia. En este contexto, las aspiraciones migratorias aparecen debilitadas y, en muchos casos, subordinadas a la necesidad urgente de estabilidad. El trauma ocupa un lugar central: quienes

han retornado de rutas peligrosas o de empleos degradantes narran experiencias tan duras que

minan no solo el deseo de migrar nuevamente, sino también la capacidad emocional para asumir cualquier forma de movilidad.

La inmovilidad no responde, por tanto, a una falta de horizonte, sino a un entorno que ha estrechado drásticamente las posibilidades vitales. Las mujeres juegan un papel especialmente relevante en este cuadro: sostienen hogares atravesados por la violencia, el duelo y la precariedad, lo que las convierte en uno de los grupos menos móviles. A ello se suma la sedentarización forzosa producida por la degradación ambiental. La imposibilidad de continuar con el pastoreo —una práctica profundamente identitaria para el pueblo afar— no solo implica la pérdida de un medio de vida, sino también de un modelo histórico de movilidad, reduciendo aún más las alternativas de desplazamiento.

Colombia

En Colombia, donde se realizaron 427 encuestas y 27 entrevistas en Cauca y Cali, la

permanencia está profundamente atravesada por los efectos históricos del conflicto armado, los repetidos desplazamientos y una marcada desconfianza hacia las instituciones. El análisis de clases latentes muestra dos grandes grupos: un 55 % que no considera migrar y un 45 % cuya intención de hacerlo se ve frustrada por distintos factores. Las cifras ilustran esta tendencia: el 98 % de quienes integran el segmento inmóvil no ha pensado en dejar el país en el último año, y el 96 % tampoco contempló mudarse de su comunidad. Además, el 90 % expresa directamente que preferiría quedarse.

Sin embargo, estos datos no deben leerse como satisfacción o estabilidad. Detrás de ellos se encuentra una mezcla de miedo, cargas familiares y desgaste emocional acumulado. Las mujeres, en particular, se mantienen en sus comunidades para sostener hogares afectados por la violencia, cuidando de hijos, mayores y familiares traumatizados. Los hombres, por su parte, enfrentan una presión mayor para buscar oportunidades fuera, al mismo tiempo que cargan con

riesgos más altos si deciden moverse. Esto genera tensiones dentro de los hogares que se terminan en decisiones negociadas y, a menudo, contradictorias.

Para quienes ya vivieron un desplazamiento, el recuerdo de haberlo perdido todo una vez funciona como un freno poderoso: migrar otra vez se percibe como emocionalmente insostenible. A ello se añaden las limitaciones ambientales, especialmente en Cauca, donde inundaciones, derrumbes y escasez de agua restringen aún más la capacidad de movilidad. En este contexto, quedarse no es una expresión de arraigo voluntario, sino una estrategia de resistencia ante un entorno que ofrece pocas alternativas viables.

Ecuador

En Ecuador emergen dos formas de inmovilidad que conviven en un mismo espacio social. Por un lado, las comunidades indígenas de Ibarra y Otavalo permanecen en sus territorios porque estos representan un anclaje cultural, espiritual y práctico: la tierra, la lengua, los rituales y las redes comunitarias constituyen la base de su decisión de quedarse. Por otro lado, las personas desplazadas de origen venezolano y colombiano experimentan una inmovilidad de carácter forzado, determinada por obstáculos legales, discriminación cotidiana y precariedad económica que restringen drásticamente sus posibilidades de movimiento.

El análisis cuantitativo muestra una distribución relativamente equilibrada entre grupos: un 57 % se ubica en el segmento de no migrantes y un 43 % en el de aspirantes. Entre quienes no contemplan migrar, el 84 % afirma querer permanecer y el 65 % no valoró moverse en el último año. En contraste, entre quienes desean migrar, solo un 13 % preferiría quedarse. Las personas desplazadas se encuentran, en la práctica, atrapadas en un estado de espera: la irregularidad documental, el trabajo informal y la falta de acceso a servicios básicos reducen casi por completo su capacidad de movilidad real.

Las comunidades indígenas, en cambio, explican su permanencia como un acto de continuidad colectiva. Para muchas mujeres, en particular, quedarse implica mantener los cuidados intergeneracionales, preservar la cohesión familiar y asegurar la transmisión cultural. Ecuador, en suma, evidencia que la inmovilidad puede ser tanto una expresión de arraigo como una consecuencia de exclusión, y que ambas experiencias se desarrollan simultáneamente en un mismo territorio.

México

En México, a partir de 350 encuestas y 22 entrevistas realizadas en Ciudad de México, la inmovilidad adquiere una configuración propia de los entornos urbanos donde coexisten migrantes en tránsito, solicitantes de asilo y población mexicana que permanece ya sea por arraigo o por responsabilidades domésticas. El análisis de clases latentes muestra que el 56 % de las personas se encuentra en el segmento inmóvil, mientras que el 44 % expresa aspiraciones de migrar. Dentro del grupo inmóvil, el 82 % no ha realizado ninguna gestión para salir del país en los últimos cinco años y el 93 % no consideró migrar durante el último año. Entre quienes sí desean moverse, apenas un 6 % permanecería incluso si contara con documentación.

La heterogeneidad de la población extranjera —proveniente principalmente de Venezuela, Cuba, países sudamericanos, Centroamérica y Haití— revela una inmovilidad producto de la espera prolongada: procesos administrativos lentos, temor a la detención y una alta incertidumbre jurídica determinan su permanencia. Las entrevistas describen una experiencia de “inmovilidad obligada”: familias enteras que permanecen en la ciudad porque dependen de citas de asilo, respuestas institucionales o trámites migratorios que avanzan con lentitud. Las mujeres, sobre todo aquellas que viajan con hijos, optan por quedarse para evitar los riesgos de las rutas

del norte; los hombres manifiestan preocupación constante por la falta de ingresos y la imposibilidad de avanzar.

Para la población mexicana, las razones de la permanencia tienen un cariz distinto: están más relacionadas con dinámicas familiares, responsabilidades de cuidado y empleos precarios que con restricciones legales. En conjunto, la inmovilidad urbana en Ciudad de México se vive como una existencia suspendida, marcada por la incertidumbre, la fragmentación de redes y la dificultad de proyectar un futuro claro.

Comparativa transversal por países: convergencias, divergencias y patrones de inmovilidad.

El examen conjunto muestra un panorama diverso pero conectado sobre las formas de permanecer en contextos frágiles. Aunque cada país presenta dinámicas propias vinculadas a su trayectoria política, condiciones ambientales, entramado institucional y composición social — como se explicó en secciones anteriores—, surgen elementos comunes que permiten entender la inmovilidad como un fenómeno global y no como una realidad aislada. Aspiraciones, capacidades, género, cuidado y riesgo se entrelazan en todos los territorios, dando lugar a patrones comparables.

A pesar de las variaciones locales, los datos cuantitativos evidencian que en los cinco países existe un porcentaje considerable de población que no contempla migrar: entre el 55 % y el 73%, según el análisis de clases latentes. Este grupo reúne a personas con menos recursos económicos, mayor carga de cuidados y acceso limitado a documentación o redes de apoyo. Paralelamente, un segundo segmento —los aspirantes con capacidades restringidas— abarca entre el 16 % y el 45 % de las personas encuestadas, compuesto en gran parte por jóvenes que desean migrar pero carecen de medios reales para hacerlo.

Similitudes en la inmovilidad por la violencia

En Mali y Etiopía, la continuidad de la violencia y la inestabilidad territorial genera formas de permanencia profundamente marcadas por el temor y por la pérdida de medios de vida. En la región maliense de Ségou —donde el 73 % de la población se ubica en el segmento de no migrantes— la movilidad se ha visto prácticamente paralizada: las rutas tradicionales están bloqueadas, las economías agrícolas y

pastoriles han sufrido un deterioro severo y el desplazamiento forzado ha convertido el quedarse en un acto de protección más que en una elección.

En la región etíope de Afar, los desplazamientos repetidos, la presión de actores armados y el derrumbe del pastoralismo han reducido drásticamente el horizonte de posibilidades. Las personas que retornan del Golfo describen experiencias tan violentas y deshumanizantes que cualquier intento futuro de migrar queda prácticamente descartado. Allí, permanecer se entiende como una medida de autopreservación.

En América Latina, aunque la violencia no se expresa bajo la forma de conflicto armado abierto, sí constituye una estructura persistente del día a día. En Colombia, las amenazas, el control de los territorios por grupos armados y los recuerdos del desplazamiento se traducen en una fuerte inmovilidad: el 98 % del segmento inmóvil no consideró migrar durante el último año. En este contexto, quedarse no necesariamente implica seguridad, pero moverse puede resultar aún más incierto.

En Ecuador y México, la violencia se manifiesta de manera más dispersa — discriminación, inseguridad urbana, explotación laboral y peligros asociados a las rutas migratorias— pero sus efectos convergen: muchas personas prefieren mantenerse en un lugar, estabilizarse o evitar trayectos que aumenten su vulnerabilidad. Para quienes están en tránsito, en particular migrantes regionales, esta situación se experimenta como una “pausa obligada”: un estado intermedio donde moverse es peligroso, pero asentarse plenamente tampoco es viable.

Los cuidados como determinante en la inmovilidad

El examen comparativo de los países pone de relieve que el género es, sin duda, el elemento que con mayor intensidad estructura las experiencias de permanencia. Aunque las expresiones concretas varían según la historia, la cultura y las condiciones económicas de cada territorio, en todos los casos el género actúa como un marco que define quién permanece, en qué circunstancias y con qué cargas materiales y emocionales. La distribución sexual del trabajo — y, especialmente, la concentración del cuidado en las mujeres— emerge como un motor constante de inmovilidad. En lugar de tratarse de una posición pasiva, la permanencia femenina es el resultado de un entramado de normas, trayectorias familiares, responsabilidades domésticas y experiencias de violencia que influyen en sus aspiraciones y en su capacidad de desplazarse.

En Mali y Etiopía, donde una parte importante de los hogares encabezados por mujeres se ubica en los segmentos más inmóviles, quedarse está íntimamente ligado a su papel como sostén cotidiano del hogar. En Ségou y Afar, las mujeres garantizan la supervivencia familiar en contextos marcados por la escasez, la inseguridad y la falta de sistemas públicos de cuidado. Su permanencia no es únicamente un deber moral, sino una condición indispensable en entornos donde no existen alternativas como guarderías, centros de atención o redes comunitarias sólidas. En las entrevistas es frecuente escuchar que, si ellas se fueran, no habría nadie que pudiera mantener la vida doméstica en marcha.

En Afar, las experiencias migratorias fallidas añaden un peso adicional. Muchas mujeres retornadas del Golfo relatan episodios de explotación o abuso que disuaden cualquier intento futuro de migración. A este trauma se suman las nuevas obligaciones de cuidado que asumen al regresar, lo que profundiza aún más su inmovilidad. La pregunta “¿quién cuidaría si yo me voy?” aparece repetidamente como síntesis de la tensión entre responsabilidad familiar, miedo y deseo personal.

En Colombia, aunque la dinámica es distinta, la raíz de género se mantiene. Allí, la permanencia femenina está vinculada a la protección y recomposición de hogares afectados por el conflicto armado y el desplazamiento. Las mujeres se quedan para sostener emocionalmente a sus familias, acompañar procesos de duelo y ofrecer estabilidad a niñas, niños y adolescentes. La desconfianza hacia las instituciones y el temor a exponerse a nuevos riesgos hacen que migrar se perciba como una alternativa aún más incierta. En este contexto, el deber de cuidado supera con frecuencia las aspiraciones individuales.

En Ecuador, la intersección entre género, etnicidad y estatus migratorio da lugar a dos formas diferenciadas de permanencia. Las mujeres indígenas de Ibarra y Otavalo explican su decisión de quedarse a partir del vínculo con la tierra, la cultura y la comunidad: su permanencia es un acto de continuidad, no de renuncia. En contraste, las mujeres desplazadas de Venezuela o Colombia enfrentan obstáculos estructurales — irregularidad documental, discriminación, falta de empleo y riesgo de violencia— que las dejan atrapadas en una inmovilidad forzada. Su permanencia responde menos al arraigo que a las restricciones.

En México, las dinámicas de género son especialmente complejas. Entre mujeres mexicanas de bajos ingresos, la permanencia está marcada por las responsabilidades domésticas, la crianza y la falta de empleos estables. Para las mujeres migrantes en tránsito o solicitantes de asilo, quedarse en Ciudad de México es una estrategia de protección frente a los peligros de continuar hacia el norte, sobre todo cuando viajan con hijos. Aunque deseen avanzar, la seguridad infantil se convierte en la prioridad, incluso si ello implica vivir en condiciones de precariedad o inseguridad jurídica.

De forma transversal, emerge un patrón inequívoco: en todos los países analizados, las mujeres cargan con los costos más altos de la permanencia. Asumen mayor volumen de trabajo no remunerado, gestionan la vida emocional del hogar, toman decisiones difíciles con menos margen de maniobra y sostienen las estructuras familiares en contextos adversos. La inmovilidad femenina constituye así una forma de agencia profundamente condicionada: una práctica activa, pero desplegada desde posiciones donde el deber, el riesgo y el cuidado limitan de manera significativa las alternativas disponibles.

Etapas de vida y la inmovilidad

En los cinco países analizados, la juventud es el grupo que más claramente manifiesta el deseo de migrar, pero también el que enfrenta las barreras más duras para convertir ese anhelo en una posibilidad real. Entre lo que se quiere y lo que se puede hay un espacio lleno de límites estructurales que se distribuyen de manera desigual según el género. Las normas sociales, las cargas de cuidado y los riesgos específicos moldean trayectorias juveniles profundamente distintas para mujeres y hombres, aun cuando ambos compartan la sensación de tener un futuro estrecho y condicionado.

En Mali y Etiopía, muchos jóvenes varones expresan frustración ante la imposibilidad de cumplir con expectativas masculinas tradicionales — proveer, desplazarse, buscar mejores horizontes— debido al conflicto, la pobreza y la desaparición de rutas seguras. Para las mujeres jóvenes, la inmovilidad opera de otra manera: aunque deseen migrar, suelen verse retenidas por responsabilidades

familiares, control comunitario y temor a la violencia, especialmente en contextos marcados por historias de explotación o retornos traumáticos.

En América Latina, estas dinámicas adoptan nuevos matices, pero comparten las mismas raíces. En Colombia, la violencia, el desplazamiento y la fragilidad institucional reducen las oportunidades juveniles en general, pero recargan de obligaciones y cuidados a las mujeres jóvenes, quienes sienten que deben sostener emocionalmente el hogar. En Ecuador y México, las jóvenes indígenas, desplazadas o migrantes en tránsito enfrentan un entramado de discriminación, inseguridad en las calles y obligaciones domésticas que limitan fuertemente su movilidad. Los hombres jóvenes, aunque también encuentran obstáculos — precariedad laboral, riesgo de detención o violencia—, no cargan con la misma intensidad la responsabilidad del cuidado ni la amenaza de violencia sexual.

Para las juventudes de los cinco países, la inmovilidad se vive como una pausa que pretendía ser provisional, pero que se prolonga sin horizonte claro. Se aplazan decisiones importantes ante la falta de medios, la inestabilidad o las exigencias familiares. El análisis de clases latentes lo confirma: el segmento de “aspirantes estructuralmente bloqueados”, compuesto mayoritariamente por jóvenes, oscila entre el 16 % y el 45 % según el país. Aunque comparten la frustración, las razones y experiencias de inmovilidad están profundamente marcadas por el género, que define no sólo por qué se quedan, sino también cómo se vive ese quedarse.

Trauma y migración fallida: cómo el dolor reduce el horizonte de movilidad

El estudio comparado muestra que el trauma —ya sea producto del conflicto armado, de la violencia estructural o de experiencias migratorias fallidas— actúa como un potente mecanismo de inmovilidad. En distintos países, las personas describen cómo episodios de abuso, explotación o peligro extremo dejan una huella emocional que estrecha su percepción de futuro y limita su disposición a moverse nuevamente. La migración fallida no solo deteriora las capacidades materiales, sino que también daña la expectativa de que el movimiento pueda mejorar la vida. La literatura antropológica ya advierte que el trauma produce estados de “tiempo detenido”, donde el pasado persiste y condiciona la acción (Fassin & Rechtman, 2009;). En este sentido, las personas retornadas no solo regresan físicamente, sino también atrapadas en una temporalidad suspendida.

En regiones como Afganistán y Mali, el trauma asociado a retornos desde rutas peligrosas — especialmente desde el Golfo— es un factor determinante. Los testimonios recogidos en el estudio describen experiencias laborales abusivas, endeudamiento, violencia física o psicológica y procesos de deportación traumáticos. Estos episodios erosionan no solo la confianza, sino también la propia idea de que la movilidad pueda ser una vía viable. Siguiendo a Nguy en (2012), muchas personas quedan atrapadas en una condición de transición infinita, entre lo que dejaron y lo que no pueden construir (). El retorno, lejos de ser un cierre, se convierte en un estado de vulnerabilidad emocional que inhibe nuevos intentos migratorios.

El trauma también se manifiesta como “stuckedness” —la sensación de estar mental y emocionalmente bloqueado— que la literatura ha documentado en múltiples contextos migratorios. Esta forma de inmovilidad no es visible en los indicadores estructurales, pero sí en las narrativas biográficas: quienes regresan describen que, incluso cuando poseen medios materiales para migrar, el miedo a repetir experiencias dolorosas actúa como freno. Tal como explica Khan (2016), el trauma puede operar como una forma extrema de autoprotección: el cuerpo y la mente se retraen para evitar un sufrimiento anticipado, incluso si esa retirada implica renunciar a oportunidades potenciales. El quedarse, entonces, deja de ser una elección libre para convertirse en un mecanismo de supervivencia psicosocial.

En América Latina, especialmente en Colombia, el trauma asociado al conflicto armado y al desplazamiento deja marcas similares. La memoria de haberlo perdido todo una vez hace que un segundo desplazamiento se viva como emocionalmente inasumible. El informe recoge testimonios donde la movilidad se percibe como una amenaza antes que una solución: huir significaría reabrir heridas, reactivar duelos o exponerse nuevamente a actores armados. Como muestra Das (2007), la violencia se incorpora en la vida cotidiana de forma silenciosa, configurando formas de inmovilidad donde el lenguaje mismo se congela y las decisiones quedan limitadas por el miedo incorporado. En este marco, permanecer constituye un intento de recomponer la normalidad después del trauma.

Por último, la juventud es especialmente sensible a estos efectos. Las experiencias migratorias traumáticas reducen su horizonte vital en un momento clave del ciclo de vida. Jóvenes etíopes y malienses devolvieron testimonios sobre cómo la violencia o el abuso durante

la migración los dejó “sin fuerzas” para imaginar alternativas. Esta reducción del horizonte no implica ausencia de aspiraciones, sino dificultades profundas para actuar sobre ellas. En palabras de, se trata de un tipo de “optimismo cruel”, donde la posibilidad de progreso persiste como deseo, pero cualquier intento de alcanzarlo se experimenta como desgaste emocional (). Así, la migración fallida se convierte en un límite invisible que estrecha las expectativas de futuro y afianza la permanencia.

Ausencia institucional y limitación estructural: cuando moverse no es una opción

La ausencia o debilidad del Estado aparece como un eje central para comprender los patrones comparados de inmovilidad en África y América Latina. Cuando las instituciones no garantizan seguridad, documentación, acceso a servicios o protección social, la capacidad de movilidad queda drásticamente reducida. En los cinco países, la fragilidad institucional se traduce en procesos cotidianos: trámites inaccesibles, sistemas migratorios que generan incertidumbre, ausencia de servicios públicos de cuidado, mercados laborales informales y fallas en la provisión de vivienda o seguridad. Según diferentes autores, estas formas de ausencia institucional producen una “liminalidad administrada”, un estado en el que las personas quedan a medio camino entre distintas posibilidades, sin poder concretarlas. Este espacio intermedio se convierte en un lugar de espera prolongada que dificulta la movilidad.

La debilidad institucional también genera bloqueos indirectos: si no hay documentos, no hay movilidad; si no hay caminos seguros, no hay tránsito; si no hay redes de apoyo, no hay alternativas. En México y Ecuador, las personas migrantes en tránsito viven esta ausencia mediante una burocracia que retrasa o imposibilita avanzar. La espera por una cita, por una resolución de asilo o por un permiso temporal se convierte en una forma de inmovilidad impuesta, tal como muestran las entrevistas. Esta realidad conecta con lo que se denomina “movilidad administrada”, donde las instituciones producen espacios de contención que funcionan como fronteras extendidas. Lejos de ser neutras, estas estructuras amplifican la desigualdad: quienes más dependen del Estado son quienes menos apoyo reciben.

En Mali y Etiopía, la ausencia institucional se manifiesta principalmente en la falta de servicios básicos: sistemas de salud insuficientes, escasez de escuelas, ausencia de infraestructuras productivas o mecanismos débiles de protección frente a la violencia.

Esta fragilidad hace que los hogares —especialmente aquellos encabezados por mujeres— absorban funciones que deberían recaer en el Estado. Al no haber servicios de cuidado, protección o apoyo a víctimas de crisis climáticas o violencia armada, las familias se ven obligadas a permanecer en sus comunidades para mantener la cohesión interna. Estas carencias funcionan como “amarras” que inmovilizan, restringiendo las posibilidades de actuar aun cuando existan deseos de movilidad. La inmovilidad emerge, así como producto de una arquitectura institucional insuficiente.

En Colombia, la debilidad institucional adopta otras formas: lentitud en procesos de restitución de tierras, escasa presencia estatal en zonas rurales, programas de protección con cobertura limitada y vacíos en la implementación del acuerdo de paz. Estas lagunas institucionales generan desconfianza y producen escenarios donde desplazarse implica exponerse a peligros sin garantías de protección. La ausencia del Estado no significa vacía, sino una presencia desigual y jerárquicamente distribuida, donde algunos cuerpos son protegidos y otros abandonados. Desde esta perspectiva, la inmovilidad es una reacción racional ante un entorno donde la protección formal resulta incierta o inaccesible.

Finalmente, la ausencia institucional también limita la movilidad mediante su impacto en la economía cotidiana. La informalidad laboral, la falta de ahorro, la escasez de crédito, la degradación ambiental y la caída de los medios de vida constriñen las capacidades de acción. Siguiendo esta línea, la desigualdad estructural produce sujetos que viven en “espacios de esperanza” reducidos, donde las posibilidades de avanzar se ven bloqueadas por estructuras macroeconómicas adversas. Para muchas familias, especialmente en África, migrar requiere recursos, redes y documentación de los que simplemente no disponen. La ausencia institucional se convierte, así, en un determinante silencioso pero poderoso de la permanencia.

Conclusiones

El análisis conjunto de Mali, Etiopía, Colombia, Ecuador y México revela una verdad que atraviesa geografías y culturas: la inmovilidad no es inmovilidad. No es quietud, ni resignación, ni ausencia de deseo. Es una respuesta profundamente humana —relacional, emocional y estructural— frente a mundos marcados por la violencia, la precariedad, el abandono institucional y desigualdades que se heredan de generación en generación.

En este entramado, el género, y
en particular los cuidados, emerge como la columna vertebral que ordena quién puede moverse, quién debe quedarse y qué precio se paga por ello.

Las mujeres —jóvenes, adultas, mayores— sostienen literalmente la vida en los cinco países

estudiados. Su permanencia no nace de una preferencia inmóvil, sino de un mandato social que

las convierte en las guardianas del afecto, de la continuidad y de la supervivencia de sus familias. Se quedan no porque falte deseo, sino porque sobra responsabilidad. Cargan con los duelos, con las rupturas, con las heridas del conflicto, con la crianza, con la vejez, con la enfermedad y con la administración diaria de hogares que resisten como pueden. La suya es una permanencia activa, poderosa, pero desigual: una agencia ejercida desde márgenes estrechos, donde las posibilidades se reducen pero la fuerza de sostener permanece intacta. Esta realidad atraviesa a mujeres pastoras de Afar, campesinas de Ségou, madres desplazadas de Colombia, mujeres indígenas de Ecuador y migrantes en tránsito que sobreviven en Ciudad de México.

Los hombres tampoco escapan a los mandatos de género. En Mali y Etiopía, los jóvenes viven

la inmovilidad como un fracaso impuesto: no pueden cumplir con el rol de proveedores porque el conflicto y la crisis climática han destruido los caminos para hacerlo. En Colombia y México, moverse implica exponerse a detención, criminalización o violencia; quedarse es una forma de protegerse. Su inmovilidad está hecha de frustración, riesgo y expectativas imposibles.

La juventud, en toda su diversidad, concentra los sueños más grandes y las barreras más firmes. El grupo que denominamos “aspirantes bloqueados” —entre el 16 % y el 45 % según el país— lo encarna con claridad: jóvenes que quieren irse, pero que no pueden hacerlo porque chocan con límites económicos, institucionales, familiares y de género. Jóvenes que esperan, que postergan, que imaginan salida pero viven quedándose.

Lo que este cuadro revela es contundente: la inmovilidad no es neutral; es profundamente generizada. Las mujeres permanecen para sostener; los hombres, porque avanzar pone en riesgo su vida. Ellas se quedan porque cargan el hogar; ellos, porque cargan el miedo o la imposibilidad.

Y es precisamente aquí donde el trabajo de Ayuda en Acción adquiere un sentido transformador. Acompañar la permanencia con dignidad —en vez de invisibilizarla—

implica reconocer el valor del cuidado, apoyar las trayectorias juveniles, reducir los riesgos que inmovilizan a los hombres, y ampliar los márgenes de decisión de quienes hoy permanecen sin alternativas. Transformar la inmovilidad requiere transformar las desigualdades que la producen. Ayuda en **Acción** trabaja justamente ahí: en devolver posibilidades donde hoy sólo hay límites; en fortalecer comunidades donde quedarse no sea un sacrificio, sino una opción elegida.

7. Recomendaciones

A lo largo de este estudio nos hemos preguntado por qué tantas personas permanecen en sus territorios aun cuando la incertidumbre, la precariedad o el riesgo forman parte de su vida cotidiana. El análisis comparado ha mostrado que quedarse no es simplemente “no migrar”, sino una experiencia compleja atravesada por los cuidados, las obligaciones familiares, las aspiraciones personales y las amenazas presentes. Las personas permanecen por compromiso, por afecto, por necesidad o porque las circunstancias no les ofrecen alternativas reales. Sin embargo, en todos los contextos analizados, quienes se quedan suelen hacerlo sin el acompañamiento institucional que necesitan.

Este apartado final recoge las implicaciones de esa brecha y propone caminos posibles. Reúne recomendaciones de política pública y acciones programáticas orientadas a fortalecer a quienes deciden —o se ven obligados a— permanecer. No se trata de frenar la movilidad, sino de garantizar que la permanencia también pueda vivirse con dignidad, con libertad y con los apoyos necesarios para construir un futuro elegido, no impuesto.

1. Reconocer y redistribuir el cuidado como prioridad política

La base de la inmovilidad femenina es el cuidado no remunerado. Es imprescindible que programas de cooperación y políticas públicas incorporen:

- Servicios de cuidado infantil accesibles y de calidad.
- Espacios comunitarios para el cuidado de personas mayores y dependientes.
- Transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas que alivien la carga emocional y económica sobre mujeres cuidadoras.
- Mecanismos de corresponsabilidad social y de género.

Redistribuir el cuidado no es sólo un tema de bienestar: es un requisito para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir si migrar o permanecer.

2. Apoyar la capacidad de decisión de mujeres y jóvenes

Es necesario fortalecer la agencia de mujeres y jóvenes, no sólo su resiliencia. Esto implica:

- Programas que fortalezcan habilidades, formación técnica y oportunidades de empleo local para mujeres jóvenes.
- Iniciativas que consideren el impacto emocional del trauma en mujeres retornadas y jóvenes desplazadas.
- Estrategias de movilidad segura para jóvenes que desean migrar, integrando información, protección y acompañamiento psicosocial.

La agencia no puede darse por sentada: debe ser acompañada institucionalmente.

3. Crear rutas de movilidad seguras, legales y accesibles

La inmovilidad forzada por falta de documentos es una realidad especialmente visible en Ecuador y México. Se recomienda:

- Simplificar procesos de regularización para mujeres migrantes y desplazadas.
- Reducir tiempos y costos de trámites administrativos.
- Crear mecanismos de movilidad legal específicos para mujeres en riesgo, especialmente aquellas responsables de menores.
- Promover acuerdos binacionales y regionales que reconozcan el impacto diferenciado del género en la movilidad.

4. Integrar la prevención de violencia basada en género en todos los programas

La violencia —doméstica, institucional, sexual o comunitaria— condiciona la permanencia y la movilidad. Es urgente:

- Incorporar prevención y respuesta a la VBG en programas comunitarios.
- Crear espacios seguros para mujeres jóvenes en zonas urbanas y rurales.
- Ampliar servicios de apoyo psicosocial para sobrevivientes de violencia y desplazamiento.

- Garantizar que los sistemas de protección nacional e internacional integren análisis de género en sus protocolos.

5. Fortalecer la autonomía económica de las mujeres para que permanezca una elección, no una obligación

La falta de ingresos es una de las barreras más importantes para transformar aspiraciones en proyectos de vida. Por ello se recomienda:

- Programas de emprendimiento y microfinanzas dirigidos específicamente a mujeres en contextos frágiles.
- Inclusión laboral con incentivos para empleadores y formación en sectores no tradicionales.
- Acceso a tierra, créditos y recursos productivos, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.

6. Escuchar las voces femeninas en el diseño de políticas

La perspectiva de género debe incorporarse no sólo como enfoque técnico, sino como participación real. Esto implica:

- Incluir a mujeres líderes comunitarias en el diseño de programas.
- Incorporar narrativas de mujeres jóvenes y cuidadoras en diagnósticos y evaluaciones.
- Fomentar espacios deliberativos donde mujeres desplazadas, retornadas o migrantes puedan influir en políticas de movilidad y permanencia.

7. Visibilizar el aporte de las mujeres a la cohesión comunitaria

- Las mujeres sostienen la continuidad de hogares, barrios y comunidades. Reconocerlo implica:
 - Producir datos desagregados por sexo sobre movilidad, retorno, desplazamiento y cuidados.
 - Narrativas públicas que no romantizen el sacrificio femenino, sino que valoren su trabajo sin naturalizarlo.
 - Programas que refuercen las redes de apoyo entre mujeres.

La inmovilidad, tal como se ha evidenciado a lo largo de este estudio, es un fenómeno profundamente ligado a la construcción de paz y al tejido social de los territorios.

Quienes permanecen —especialmente mujeres, jóvenes y hogares afectados por el desplazamiento o la pobreza— sostienen en su vida cotidiana la continuidad de comunidades enteras, preservan vínculos, cuidan a quienes han quedado más vulnerables y mantienen viva la posibilidad de reconstrucción. En contextos marcados por la violencia, la crisis climática o la incertidumbre, quedarse se convierte en un acto que sostiene el orden social, aun cuando no sea reconocido como tal. Entender estas formas de arraigo y permanencia es clave para repensar las estrategias de cooperación, pues la paz duradera no se construye únicamente facilitando movilidad, sino también fortaleciendo a quienes sostienen la vida en el territorio.

En esta dirección, Ayuda en Acción, desde sus programas de inclusión socioeconómica y su presencia directa en terreno, aporta de manera decisiva a la consolidación de paz y a la resiliencia comunitaria. Su trabajo junto a mujeres cuidadoras, jóvenes sin oportunidades, familias desplazadas y comunidades afectadas por el clima o la violencia crea entornos más seguros, más equitativos y más cohesionados. Desde la generación de medios de vida hasta la creación de espacios de cuidado y la promoción de liderazgos locales, la organización contribuye a que quedarse sea una opción viable y no una imposición. Así, Ayuda en Acción se posiciona como un actor clave de la cooperación para la paz, acompañando procesos que fortalecen la libertad, la dignidad y la capacidad de las comunidades para construir futuro en medio de la fragilidad.

Bibliografía

- Arango, J. (2007). Las migraciones internacionales en un mundo globalizado. *Vanguardia dossier*, 22, 6- 15.
- Ayuda en Acción. (2025). Inmovilidad: factores, estrategias y arraigos en contextos de alta vulnerabilidad.
- Carling, J. R. (2002). Migration in the age of involuntary immobility: Theoretical reflections and Cape Verdean experiences. *Journal of ethnic and migration studies*, 28(1), 5-42.
- De Haas, H. (2010). The internal dynamics of migration processes: A theoretical inquiry. *Journal of ethnic and migration studies*, 36(10), 1587-1617.

De Haas, H. (2021). A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. *Comparative migration studies*, 9(1), 8.

Mata-

Codesal, D. (2017). Gendered (im) mobility: Rooted women and waiting Penelopes. *Crossings: Journal of Migration & Culture*, 8(2), 151-162.